

Aldama reconoce las mordidas a Ábalos y Koldo y pide una rebaja de su pena

Reclama que se le aplique una atenuante «muy cualificada» porque su colaboración ha sido «proactiva y temprana»

M. SÁIZ-PARDO / M. BALÍN

MADRID. Víctor de Aldama reconoce todos los cargos que pesan contra él en el 'caso mascarillas', por el que se va a sentar en el banquillo del Tribunal Supremo en breve junto a José Luis Ábalos y Koldo García. Pero el empresario y comisionista pide a Anticorrupción que rebaje la petición de siete años de prisión que le reclama. Arguye que la Fiscalía debe aplicarle una «atenuante muy cualificada» por su supuesto papel de 'arrepentido'.

En el escrito presentado ante el Supremo —en el que De Aldama no menciona pago alguno al Partido Socialista— su defensa subraya la colaboración «proactiva» y «temprana» del encausado, que también —sostiene su abogado— ha presentado «evidencias documentales» que han permitido imputar a los otros participantes en la supuesta trama de compra de material sanitario durante la pandemia por parte de administraciones socialistas a cambio de unas «comisiones ilegales», que De Aldama admite haber pagado en su alegato.

Desde 2018

En un escrito de 26 páginas, al que ha tenido acceso este periódico, el letrado José Antonio Choclán, artífice del acuerdo que sacó de la cárcel a su defendido, reconoce la participación de su cliente en este supuesto entramado ilícito desde 2018, básicamente desde la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez al poder.

La defensa explica que Víctor de Aldama entró en contacto con



El comisionista Víctor de Aldama a su salida de la Audiencia Nacional en noviembre pasado. EFE

Confiesa que la trama pivotaba sobre la influencia del «cargo» del ministro en el Gobierno pero también en el PSOE

Ábalos y Koldo a través de su hermano Rubén, escolta del ministro. Desde entonces, las interacciones se multiplicaron, desde reuniones con autoridades mexicanas hasta viajes vinculados a la promoción empresarial. Estos encuentros, indica el documento, reforzaron la relación entre los tres investigados, quienes habrían detectado «la oportunidad de obtener

un común beneficio económico».

«Con tal ánimo de enriquecimiento, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el Partido Socialista, éste podría favorecer —naturalmente, a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían— la contratación con la Administración Pública (...) por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama», escribe Choclán, haciendo suyas textualmente las acusaciones de la Fiscalía.

El abogado del empresario admite que su cliente, «en beneficio propio y de terceros» y gracias a su influencia sobre los otros dos

acusados, «garantizada mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero», logró la adjudicación de determinados contratos públicos.

En esta trama —continúa el relato del letrado— cada uno asumió un rol complementario. Ábalos aportaba «la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el Ministerio de Transportes», mientras que García actuaba como operador directo. Por su parte, Aldama asumía la tarea de «localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la administración» y vehicular sus intereses «siempre a cambio de la correspondiente prestación económica».

El hermano de Sánchez será juzgado por el tribunal inicial al desestimarse la recusación

ROCÍO ROMERO

BADAJOS. La Sala Especial del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) desestima las recusaciones que había presentado el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, contra los magistrados designados para juzgarle en la Audiencia Provincial por pre-

suntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa por su contrato en la Diputación de Badajoz en 2016. Hay otros diez imputados. Entre ellos, el expresidente de la institución Miguel Ángel Gallardo y nueve personas vinculadas con el organismo provincial. El alto tribunal extremeño considera que los magistrados no están contaminados

para juzgar si la Diputación de Badajoz enchufó al hermano del presidente del Gobierno.

La recusación, que además de Sánchez habían presentado otros dos abogados, se basaba en que los magistrados estaban ya contaminados en esta causa al haber decidido sobre los recursos que ellos mismos habían presentado contra algunas decisiones de la jueza de instrucción que les ha sentado en el banquillo, Beatriz Biedma.

La Sala considera que «no concurren motivos para considerar que se ha producido una pérdida de imparcialidad objetiva en los tres magistrados que conforman la sala de enjuiciamiento por ha-

ber dictado otras resoluciones en el procedimiento de referencia».

Así, los once imputados se sentarán ante José Antonio Patrocinio, Emilio Serrano y María Dolores Fernández.

El Superior extremeño continúa así la línea marcada por estos mismos magistrados, que ya se consideraron aptos para juzgar esta causa, y la Fiscalía, que rechazó también que se dieran motivos para la recusación.

La Sala especial que firma este auto está formada por la presidenta del TSJ extremeño, María Félix Tena; la presidenta de la Sala de lo Social, Alicia Cano, y la presidenta de la sala de lo Contencioso-Administra-

La Audiencia de Valencia mantiene imputada a Pradas por la gestión de la dana y detalla los indicios contra ella

ALBERTO GONZÁLEZ RALLO

VALENCIA. La Audiencia Provincial de Valencia confirmó ayer la decisión de la magistrada de Catarroja de denegar el sobreseimiento libre de la causa y continuar con sus diligencias para aclarar qué sucedió durante la mortal riada del 29 de octubre de 2024. Los seis magistrados que integran la sección Segunda desestimaron así el recurso de apelación que había presentado la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, al que se adhirió el otro investigado: el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.

«La existencia de indicios iniciales suficientes obliga a continuar la instrucción para despejar cualquier duda», concluye la Sala. La recurrente sostuvo que la pérdida de vidas humanas se debió a una «catástrofe natural de magnitud imprevisible y de desarrollo tan veloz que impidió reaccionar con tiempo suficiente a todo el Cecopi (Centro de Emergencias)».

Pero la Audiencia recopiló toda una serie de indicios por los que considera que no se puede descartar a día de hoy una conducta negligente de Pradas y Argüeso: la información desatendida que trasladó el Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el elevado número de llamadas de emergencia al 112 (19.821) ese día, la no activación del Plan Especial de Inundaciones que obligaba a supervisar los barrancos o la activación tardía del sistema ES-Alert.

tivo, María del Carmen Romero. Asimismo, formarán el tribunal los magistrados Antonio María González Floriano, Pedro Manuel Izquierdo y Carmen Bravo. Esta última, magistrada de la sala de lo Contencioso-Administrativo, será la ponente.

La Audiencia Provincial de Badajoz tendrá que decidir sobre este proceso por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en el contrato de David Sánchez como coordinador de las actividades musicales de los conservatorios en 2016, y el posterior cambio de denominación de este puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas.